

Lo social no admite diferimientos

MERCEDES PULIDO DE BRICEÑO

H

asta hace pocos años se mantenía como hecho indiscutible que el crecimiento económico garantizaría el desarrollo integral de los pueblos. América Latina creció sistemáticamente durante los 60 e inicios de los 70 y, si bien logró resultados importantes en el acceso a la educación y a la salud e incluso en la ampliación del mercado laboral, sus logros no han garantizado el autosostenimiento del desarrollo. Ha sido constante mantener que la mejor política social es una buena política económica. Esto no resulta tan cierto, cuando observamos las brechas de diferencias de ingresos y la creciente exclusión aún en países desarrollados. La concentración de la riqueza y del poder se está asociando al fuerte crecimiento del capitalismo clientelar. La dolorosa verdad es que la desigualdad social es una realidad compleja.

¿Qué tenemos que afrontar?

Con la publicación del Informe de Desarrollo Humano 1998, de las Naciones Unidas, se señala al continente latinoamericano como el de mayor desigualdad social y por ende de oportunidades. En Venezuela, el 20% más pobre tiene un ingreso per cápita de 1.505 dólares anuales, mientras que el 20% más rico tiene 24.411 dólares. Esta proporción es similar en Chile y Argentina. Esta situación no es posible revertirla si no hacemos un esfuerzo sostenido de identificar causas e intervenir en las tendencias.

Indudablemente, la intervención mayor es afrontar la educación como problema y como alternativa. Y aquí hay varias realidades. Por una parte, la organización del sistema educativo y la capacidad institucional de servicios eficientes. No es únicamente decretar o diseñar nuevas leyes, sino reinventar las relaciones de los diferentes actores del proceso. Esto significa, en pocas palabras, entender que la sociedad entera tiene que asumirse como sujeto y obje-

to del aprendizaje. Por otra parte, la inversión en educación implica infraestructura física, equipamiento, maestros, material didáctico, pero también una pedagogía que fortalezca la identidad, el desarrollo personal, la capacidad de riesgo e innovación y, sobre todo, comprensión del conocimiento. Dentro de los nuevos actores, que son sujetos y objeto del aprendizaje, están los medios de comunicación social, ya que a través del mensaje, la imagen y la ubicuidad se convierten en los maestros de la cotidianidad y son forjadores de valores y conductas, motivos y aspiraciones, que el sistema educativo formal no puede ignorar.

Aumentar el gasto educativo es irreversible. Pero, también lo es distribuirlo de acuerdo a las prioridades de la población más vulnerable, lo cual implica involucrar a los sectores sociales y productivos del país en alianzas estratégicas que permitan compartir iniciativas, diversidades y responsabilidades en un objetivo común.

Similar situación se enfrenta en el campo de la salud, en donde las desigualdades señalan que el 42% de nuestra población no tienen acceso a los servicios. Y ¿por qué extrañarnos, si la inversión en salud representa sólo el 2% del PIB?

La responsabilidad fundamental de un Estado democrático es garantizar ciudadanos sanos y educados, que tengan la opción y las condiciones para desarrollar plenamente sus potencialidades; de lo contrario, no habrá condiciones para superar las desigualdades.

El capital humano

En una sociedad de servicios como la que se vislumbra, el capital humano es el bien clave para el desarrollo social sostenible y un activo básico en el mercado de trabajo. La conformación de este capital responde a la interrelación de dos componentes: la educación formal y el aprendizaje familiar. Es así, que el clima educativo del hogar, esto es el nivel educativo de los padres y del entorno, los ingresos familiares, el hacinamiento, las condiciones de vivienda y aislamiento y la organización de la estructura familiar, no sólo son limitantes para el rendimiento educativo,

sino que conforman patrones de vida que impiden aprovechar el reto de las oportunidades. Así mismo, las dificultades socioeconómicas están afectando seriamente el equilibrio familiar, de donde surge una dimensión desconocida de la violencia, el abandono, la prostitución temprana, la explotación laboral infantil, dificultan aún más los mecanismos de adaptación e integración social.

El desempleo abierto está correlacionado con los grupos sociales pobres, pero además la limitación creciente de nuevas oportunidades afecta fundamentalmente a los jóvenes por su baja calificación, y a las mujeres que se han visto forzadas a ingresar al mercado laboral para complementar los ingresos familiares o por la organización de la estructura familiar que las convierte en jefes de hogar sin ninguna preparación.

La economía informal ha sido la respuesta ante la contracción del mercado laboral y por demás es conocido cómo ha afectado la estabilidad familiar, la calificación y la posibilidad de ahorro, con la consecuente falta de protección social.

El afrontar la desigualdad es, hoy en día, impostergable. La democratización de los procesos políticos y la visibilidad de las diferencias sociales, hace que sea imposible el desarrollo si no se integran los sectores pobres, que son la gran mayoría.

La clave estratégica del capital humano

El mejorar los ingresos familiares e individuales y la existencia de mayores y mejores opciones de acceso a la salud, educación, vivienda y ciudadanía lleva a que las familias y los individuos puedan buscarse y lograr un mayor bienestar y calidad de vida. El carácter estratégico involucra aceptar que un ingreso mejor distribuido permite no sólo capitalizar el recurso humano necesario a la transformación productiva a corto y mediano plazo, sino que amplía el mercado interno necesario para el crecimiento. Mas aún, el facilitar mayores niveles de dignificación en las condiciones de vida, aumenta también los niveles de productividad, y al au-

mentar los niveles de bienestar aumentan los niveles de participación, lo cual es un fuerte incentivo político y moral para la transformación de las relaciones sociales y económicas que aspiramos.

Aceptación de disensos y construcción de consensos

El primer consenso imprescindible es la decisión de afrontar la creciente pobreza, reconociendo y asumiendo su complejidad. Ello implica una política social eficiente para generar servicios que lleguen a los grupos más irregulares y específicos, pero también una política económica que regule el equilibrio del acceso a las oportunidades. Si hemos observado que el uso de mano de obra intensiva reduce la desigualdad de ingresos, el Estado tiene que equilibrar la necesidad de crecimiento basado en el trabajador y disminuir el apoyo a políticas que eleven, directa o indirectamente, el costo de la mano de obra. Para ello existen políticas de incentivos y diferenciales impositivos.

Un segundo consenso, concomitante con el enfrentamiento de la pobreza, es el fortalecimiento del empleo y del ingreso familiar. La inversión pública es imprescindible para apoyar las estrategias de inserción juvenil y femenina, de intermediación laboral, como nuevos actores del mercado laboral. No es suficiente asumir como única variable el proceso de capacitación; además de ello, se requiere incentivos para los empleadores, y también el diseño de perfiles ocupacionales que faciliten complementar las carencias del aprendizaje laboral y, sobre todo, el aprendizaje de responsabilidad individual. En cuanto a la mano de obra no calificada, se tiene que aceptar su bajo nivel educativo y la necesidad de ir complementando el mismo con acciones de reconversión y recalificación. Probablemente, uno de los mayores retos es abordar estratégicamente la institucionalización de la economía informal, abriéndola hacia la seguridad social y jurídica.

El tercer consenso se refiere al mejoramiento de la cobertura y calidad de servicios de la educación, salud, nutrición y servicios sociales básicos. El proceso

de descentralización tiene que acompañarse con una mentalidad de mancomunada para abordar la integralidad de la vida.

Si bien la prioridad de lo social se acentúa en la formación del capital humano, éste reposa interdependientemente sobre la formación y consolidación del capital social y del capital institucional, sin los cuales no es posible revertir las tendencias existentes.

La reforma del Estado es imprescindible, si queremos una acción eficaz, eficiente y responsable. Aquí enfrentamos dos niveles de acción: el Estado tiene que ser capaz de garantizar las condiciones de competencia y al mismo tiempo ser capaz de suplir las deficiencias del mercado en la búsqueda del bienestar social. Pero, la posibilidad del crecimiento en democracia significa abrir los espacios para desarrollar la capacidad de sociedad para organizar, estructurar y canalizar las demandas en relación a sus derechos constitucionales, así como, la capacidad de los actores políticos para producir la intermediación entre sociedad y Estado. Devolverle al Estado su legitimidad y eficacia, implica desarrollar el capital institucional y la capacidad de representación real de las instituciones mediadoras.

Se requiere convocar y lograr la concurrencia de voluntades para enfrentar la dispersión actual y su aislamiento de la realidad de la gente. La participación de la sociedad civil y de los actores emergentes exige fortalecer la diversificación, pero también las capacidades de participación, su fortalecimiento institucional y su marco de seguridad jurídica para conferir transparencia y certidumbre a la relación público-privada. La sociedad civil no sustituye al Estado, su papel clave y estratégico es vigilar y presionar al Estado en la búsqueda del bien común.

Asumir la complejidad de lo social es imprescindible para lograr la motivación y capacidad de movilización al cambio que todos sentimos y buscamos.

MERCEDES PULIDO DE BRICEÑO

Psicóloga social y
Directora de la Revista SIC